

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios de Periodismo Joven sobre violencia de género, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

Antes de entrar a analizar el texto sometido a informe es preciso señalar que, habida cuenta de la fundamentación legal del informe que inmediatamente va a evacuarse y su carácter preceptivo, a tenor de lo dispuesto en las normas que acaban de señalar, debería indicarse en la Exposición de Motivos de la norma que la misma ha sido sometida al previo informe de la Agencia Española de Protección de Datos.

Dicho esto, el presente informe se limitará a analizar el Proyecto sometido a informe desde la perspectiva de la aplicación de las normas de protección de datos de carácter personal, asumiendo el hecho de que pese a la denominación de los mismos los “Premios” regulados por el mismo tienen más bien la condición de subvenciones, sometidas al régimen establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por lo que serán de aplicación a los mismos las habilitaciones para el tratamiento de datos y para su comunicación al órgano otorgante de la subvención establecidas en dicha Ley.

El Proyecto contiene una previsión general en materia de protección de datos, incluida en su artículo 5, que dispone en su párrafo primero que “La presentación de la solicitud conlleva la autorización del solicitante para tratarlos automatizadamente y cederlos, para fines de evaluación, seguimiento y control al órgano evaluador y a los organismos de control comunitarios y nacionales, en su caso.”, añadiendo su párrafo segundo que “el/la solicitante que acredite ser víctima de violencia de género, ha de prestar su consentimiento para su tratamiento y cesión, mediante la firma que en el anexo correspondiente fije cada convocatoria.”.

Además, el artículo 4.3 establece que en la solicitud los aspirantes deberán incorporar la “autorización al órgano convocante, que se hará constar en la solicitud o en cualquier otra comunicación posterior para que éste compruebe sus datos mediante el Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, según establece el Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, o en su caso, fotocopia del documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de residencia o trabajo.”.

Finalmente, resulta igualmente relevante lo dispuesto en el último párrafo del artículo 8 del Proyecto sometido a informe, que dispone que “Los premios concedidos se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado”, durante el mes siguiente a cada trimestre natural y se incluirán todas las concedidas durante dicho periodo (...)”.

De las normas citadas se desprende en primer lugar la necesidad de que el Proyecto se acompañe de un Anexo en que se proceda a la creación del fichero de datos vinculado a las subvenciones que el mismo regula, dando así cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley Orgánica 15/1999 y 54 de su reglamento de desarrollo.

Por otra parte, en cuanto a los consentimientos a los que se refieren los que se refieren los artículos 4 y 5 debemos señalar, en primer lugar, que dichos consentimientos no serían precisos en lo que respecta a los incluidos en el segundo inciso del párrafo primero del artículo 5, toda vez que la comunicación de los datos a los órganos de evaluación deriva necesariamente de la solicitud de la subvención, siendo necesaria para el pleno desarrollo de la relación jurídica instada por el interesado, mientras que la cesión a las autoridades españolas y de la Unión Europea encargadas de la fiscalización de las ayudas trae causa de las leyes internas y las normas de derecho de la Unión. De este modo ambas cesiones se ampararía respectivamente en las letras c) y a) del artículo 11.2 de la Ley Orgánica 15/1999, no siendo preciso requerir el consentimiento de los interesados.

En cuanto al consentimiento para la verificación al que se refiere el artículo 4.3, es cierto que la Ley 11/2007 vincula el acceso a la información sobre identificación de los afectados al consentimiento de los interesados y que el Tribunal Supremo en sentencia de 15 de julio de 2010 vino a anular el artículo 11 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 que entendía implícita la facultad de verificación en la solicitud. Sin embargo, debe plantearse hasta qué punto puede considerarse que el consentimiento como requisito exigido directamente por una norma de convocatoria de una subvención cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, cuyo artículo 3 h) exige, en primer lugar, que el mismo pueda ser considerado libre. De este modo, si se impone la prestación del consentimiento para que la solicitud pueda considerarse efectivamente presentada el carácter libre del mismo quedaría adulterado.

A nuestro juicio, sería conveniente que se estableciese en el Proyecto algún requerimiento adicional al interesado en caso de no prestar el citado consentimiento para poder acreditar efectivamente su identidad, como la presentación del Documento Nacional de identidad o algún documento que corrobore su identidad, pero no debería servir la no autorización a la consulta de la base de datos como impedimento para la participación en el procedimiento de concurrencia establecido en el Proyecto.

En cuanto a los datos relacionados con la salud de los solicitantes, el problema se plantea como consecuencia del hecho de que el Proyecto establece las condiciones de otorgamiento de las subvenciones, como no puede ser de otra forma, en unos términos genéricos, quedando pendiente su concreción de las concretas convocatorias. De este modo si la propia condición del solicitante como víctima de la violencia de género resulta relevante podría plantearse la procedencia del consentimiento señalado, pero partiendo en todo caso de la libertad en la prestación del consentimiento, toda vez que no parece que en este caso nos encontremos ante unas ayudas a víctimas, sino a quienes “mejor hayan contribuido en la defensa y difusión de los valores contra la violencia de género”.

Respecto, por último, a la publicación de los datos de los premios concedidos en el Boletín Oficial del Estado, debería tenerse particularmente en cuenta la aplicación del principio de proporcionalidad, al que se refiere el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 cuando dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido.”.

Ello es especialmente relevante si las bases reguladoras de cada convocatoria establecen como mérito relevante el ostentar el beneficiario la condición de víctima de la violencia de género, por cuanto la publicación en Internet podrá, por una parte, poner de manifiesto quiénes tienen tal condición y por otra identificar a las víctimas, con el posible riesgo que ello podría conllevar.

De este modo, sería conveniente que dicha publicación se hiciese en tales casos minimizando la información identificativa de los beneficiarios, bien mediante la no inclusión de sus nombres y apellidos y su sustitución, en su caso, por las iniciales de los mismos, bien mediante la supresión total o parcial de los datos de su documento nacional de identidad. En todo caso, por otra

parte, y especialmente a fin de evitar los riesgos mencionados, debería establecerse que se adoptarán medidas encaminadas a ordenar al Boletín Oficial del Estados que a su vez adopte las medidas necesarias para evitar la indexación de la información por parte de los motores de búsqueda, tales como el establecimiento de protocolos de exclusión.

De este modo, el Proyecto debería tener en cuenta en su artículo 8 estas previsiones, tanto en lo referente a la minimización de los datos publicados como a la evitación de que los mismos puedan ser objeto de indexación por los motores de búsqueda, especialmente si la condición de víctima de la violencia de género es uno de los factores que serán valorados para la obtención de las subvenciones.